

C.A. de Santiago

Santiago, trece de octubre de dos mil veintidós.

Vistos:

En estos autos RIT T-1684-2019, provenientes del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, caratulados “*Muñoz con CODELCO*”, por sentencia de cuatro de enero de dos mil veintidós, se rechazó la acción principal de tutela, pero se acogió la demanda subsidiaria y prestaciones por despido injustificado, sin costas.

Contra dicho fallo, ambas partes presentaron recursos de nulidad.

La demandante en virtud de lo dispuesto en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo; y en subsidio, según lo establecido en el artículo 477 en relación con el artículo 493 del mismo código; solicita que se anule la sentencia, dictando una de reemplazo que acoja la denuncia de vulneración de derechos fundamentales en todas sus partes, ordenando el pago de las indemnizaciones legales previstas en el artículo 489 del Código del Trabajo y demás prestaciones demandadas, con costas.

En tanto, la demandada por la causal del artículo 477, en vistas de lo dispuesto en el artículo 161, en relación con lo prevenido en el 454 N°1 y 162 del Código del Trabajo, pide que se rechace la demanda por despido injustificado, recargo del 30% y devolución del AFC. Luego, por la causal del artículo 477 por infracción a los artículos 13 y 52 de la ley 19.728 y los artículos 161 y 168 del Código del Trabajo, requiere que no se haga lugar al pago de AFC y se impute a las indemnizaciones. Y finalmente, por la causal contenida en el artículo 478 letra e) por falta de requisitos del artículo 456 N°4 del Código del Trabajo, pretende se dé lugar a la excepción de compensación. Indica además que *“la forma de proposición de las causales, esto es, la forma de lo simplemente múltiple y simultánea, se sigue que las distintas causales podrían postularse de esa manera y que, por ende, exigirían un pronunciamiento específico. Por lo mismo pueden ser aceptadas todas, rechazadas todas o aceptadas unas y desestimadas las otras. En otras palabras, debieran recibir un tratamiento equivalente al que -como pretensiones- tuvieron en la instancia respectiva”*. Todo, con costas.

Se declararon admisibles los recursos y se escuchó alegatos.



Considerando:

I.- Respecto del recurso de la parte demandante:

i) Causal principal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo:

Primero: Que esta causal de nulidad tiene lugar si la sentencia ha sido dictada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba en base a las reglas de la sana crítica.

La parte recurrente sostiene su arbitrio indicando que la sentencia, al rechazar la acción principal de vulneración de derechos por despido antisindical, *“infringe los principios de la lógica en la valoración de los indicios debidamente aportados por su parte en coherencia con los hechos que fueron probados en autos”*. Cita al efecto el Considerando 9. en el cual establece el juez, que ha sido aportada prueba indiciaria en el sentido de un “panorama discriminatorio”, fundado en la diferencia de trato a los sindicatos formados por supervisores respecto de los sindicatos y federación de operarios; sin embargo, posteriormente en el Considerando 14. no hace aplicable el artículo 493 del Código del Trabajo y desecha la acción de tutela, aunque luego, decide que el despido ha sido ilegal.

Es así, como el recurrente se pregunta, si ha quedado satisfecha la carga indiciaria respecto de la discriminación en razón de afiliación sindical y ha quedado asentado que los despidos no correspondieron a necesidades de la empresa al haber contratado con posterioridad a trabajadores reemplazantes en perfiles análogos, entonces ¿cuál es la real causa de despido de los trabajadores demandantes? El fallo indica que la causa del despido es una reestructuración organizacional, pero no explica por qué reemplaza a un determinado trabajador por otros con perfiles análogos. En su concepto la explicación es su calidad de sindicalizados.

En definitiva, sostiene que el fallo infringe las reglas de la sana crítica, en especial lo referido a la *“lógica, y sus principios, ya que contiene conclusiones contradictorias, y carece de razonamiento suficiente para determinar que la intensidad de los indicios aportados”*, lo deriva completamente de los derechos reclamados, en razón de que



existe prueba e información suficiente, para a lo menos realizar una ponderación de la medida adoptada, sobre todo, porque es el mismo juez, quien reconoce la existencia de hechos vulneradores y el despido arbitrario no conforme a derecho.

Esta infracción influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que de no haberse producido se habría accedido a la acción principal.

Segundo: Que el recurso de nulidad constituye la sanción más drástica que admite el procedimiento laboral. Tanto porque sus causales se fundamentan en graves infracciones al debido proceso y al derecho de las partes de conocer las razones de las decisiones judiciales, como por las consecuencias que ello trae para la jurisdicción en general. Este control efectuado por el superior jerárquico no es aleatorio ni de oficio, salvo asuntos de mucha excepcionalidad, lo que implica una carga de precisión en su fundamentación y peticiones que se plantean que requiere ser seria y completa.

Tercero: Que pese a las exigencias de este motivo de invalidación, según el claro tenor del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, el recurrente no identifica ni explica ninguna regla en particular de la sana crítica -como los principios de la lógica, las máximas de la experiencia, las razones científicas o técnicas- que hayan sido transgredidas por el tribunal a quo, al momento de valorar la prueba, limitándose a constatar lo que él entiende sería una falta de razonamiento lógico en general, mencionando una eventual contradicción de las conclusiones jurídicas del sentenciador.

Se añade al defecto anterior, que solicita que se acoja la acción principal de tutela en circunstancias de que presentó una demanda subsidiaria, es decir, para el caso de no ser acogida la primera, sin indicar en el recurso qué pretende respecto de esta última, y que fue otorgada por el juez, de lo que se sigue que no se advierte entonces cuál es el perjuicio que debe ser reparado; o de qué manera se resolvería entonces con lo que ya viene acogido, puesto que ambas peticiones no podrían sobrevivir.

Cuarto: Que, no obstante este alcance, sobre los aspectos impugnados en general, del examen del fallo aparece con claridad que



el sentenciador se abocó a revisar con todo detalle la prueba rendida respecto de los indicios, según mandata el artículo 493 del Código del Trabajo, dando por establecida la posibilidad de la discriminación que en este caso se denunciaba por la calidad de afiliados al sindicato; sin embargo, en el análisis correcto y lógico del caso, conforme a la misma disposición evaluó y ponderó lo relativo a la necesidad y proporcionalidad de la medida de parte de la empresa, con la prueba por ella aportada, que logró el estándar suficiente para desvirtuar esa primera aproximación.

Lo anterior, en nada obstaculiza que pueda declararse -como se hizo- que los despidos fueron injustificados, puesto que son otros los exámenes que deben efectuarse; así, a la par de tener por acreditadas las razones de reestructuración organizacional de la empresa que derivaron en los despidos, se decidió que en el caso concreto, respecto de estos precisos trabajadores, no se explicó suficientemente esa necesidad empresarial ya que se contrató a otras personas en su reemplazo, último requisito que la doctrina y la jurisprudencia han diseñado para completar la figura del artículo 161 del Código del Trabajo, permitiendo su aplicación.

Quinto: Que en definitiva la causal no ha podido prosperar y será desechada porque más parece ser que, lo planteado por el recurrente, es en realidad un desacuerdo con las conclusiones arribadas por el sentenciador acerca de las probanzas allegadas al juicio, pero no propiamente una insuficiencia en el razonamiento o una contradicción en la derivación de las consecuencias lógicas con respecto a las probanzas.

ii) Causal subsidiaria del artículo 477 del Código del Trabajo:

Sexto: Que para el caso de no ser admitida la anterior, la parte demandante esgrime la causal de infracción de ley, en este caso del artículo 493 del Código del Trabajo.

Aduce sobre ella que, a pesar de arribar el juez a la convicción de que el despido es improcedente porque no existen necesidades de la empresa, desestima la tutela; y a pesar de que asienta la conflictividad con el empleador, no relaciona los hechos que el mismo tiene como



probados, hechos que, y no existiendo justificación del despido, llevan al sentenciador en la aplicación de la norma del 493 a cuestionarse analizar las medidas y su ponderación.

Resulta evidente para el recurrente que no se aplica la norma en su real sentido, pidiendo más allá de lo que establece la norma y no aplica la prueba por indicios del trabajador.

Séptimo: Que subyace en este motivo de nulidad, la misma queja de la causal anterior, con la diferencia de que olvida en este caso que el nudo importante, y que no ha podido desenredar el recurrente, es que el propio artículo 493 del Código del Trabajo señala: *“Cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”*. Es decir, primero debe verificarse si existen indicios, lo que aquí fue positivo, pero luego de ello, se ofrece la posibilidad de dar una respuesta satisfactoria que margine la ocurrencia de discriminación. Por último, es de comprensión básica distinguir entre un despido discriminatorio y uno injustificado, los que solo en ocasiones podrían darse conjuntamente, pero no necesariamente.

Octavo: Que como se ve tampoco lleva razón el recurso en este acápite.

II.- Sobre el recurso de la parte demandada:

iii) Primera causal del artículo 477 del Código del Trabajo:

Noveno: Que la causal del artículo 477, sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar por una correcta aplicación del derecho a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos tenidos por probados. Por lo mismo, esto es, por tratarse de un examen puramente jurídico, supone la aceptación de los hechos establecidos en la sentencia, por lo que la fundamentación y sustento del recurso por este motivo debe ser coincidente con ese propósito, guardándoles fidelidad.



Décimo: Que se sostiene por la parte demandada que la sentencia ha incurrido en infracción de ley, tanto respecto del artículo 161 del Código del Trabajo, en cuanto da lugar al pago del recargo del 30% por declarar injustificados los despidos; cuanto porque condena a su parte a la devolución del aporte al seguro de cesantía, vulnerando lo establecidos en el artículo 454 N°1 en relación con el artículo 162 del mismo cuerpo legal.

Undécimo: Que en cuanto a la justificación del despido y el consiguiente recargo legal, indica que los hechos asentados en las cartas de despido fueron reconocidos en la sentencia como demostrados, al afirmarse que existió una reestructuración organizacional de la Casa Matriz que afectó puestos de trabajo, por lo que correspondía determinar el despido como justificado, descartándose dicho pago-sanción.

Duodécimo: Que en relación con la causal de término de contrato necesidades de la empresa, el artículo 161 del Código del Trabajo, establece que *“...el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores.* Pero como se observa, no se establece allí un concepto, sino ejemplos; de manera tal que debe ser el sentenciador o sentenciadora quien precise su sentido y alcance.

En tal dirección los tribunales han venido sujetando su configuración a la concurrencia de tres exigencias que emanan del mismo precepto legal: que la necesidad se funde en un supuesto técnico o económico; que la necesidad sea de sea de carácter objetivo; y que haya una relación causal entre ésta y la necesaria separación de uno o más trabajadores.

Décimo tercero: Que en cuanto a la primera exigencia, el elemento técnico se refiere a rasgos estructurales de instalación de la empresa, que provocan cambios en la mecánica funcional de la misma; mientras que el aspecto económico, importa en general a la existencia



de un deterioro en las condiciones económicas de aquella que haga inseguro su funcionamiento. Rasgos que se presentan en la especie, según da cuenta la sentencia, ya que existió una reestructuración organizacional de unidades gerenciales como política de optimización y reducción de costos, mejoras de competitividad y eficiencia operativa, respaldada en análisis y estudios previos y sostenida en la necesidad pública de la minera estatal.

Décimo cuarto: Que lo mismo aparece respecto de la segunda exigencia, referida a que la causa sea objetiva, ello significa que debe ser ajena a la conducta contractual o personal del trabajador y a la mera voluntad del empleador, exigiendo en todo caso de la concurrencia de hechos o circunstancias que la hagan procedente, lo que se dio por cierto con los antecedentes revisados por el juez y que fundamentan también la procedencia del elemento anterior.

Décimo quinto: Que la trabazón se produce, sin embargo, en la tercera exigencia, que plantea que el supuesto indicado debe hacer necesaria la separación de uno o más trabajadores, ya que eso implica la definición de los concretos trabajadores que serán despedidos, y la procedencia de reemplazo de los trabajadores despedidos. Esta situación no es aplicable a los demandantes quienes tenían funciones específicas para las cuales se contrató a otras personas, sin que la empresa justificara las razones de calificación técnica que eran procedentes, de manera que, descartada la discriminación a propósito de la tutela, no quedaba más que la arbitrariedad, cuestión que fundamenta la falta de justificación legal del despido por parte de la empresa.

Décimo sexto: Que por lo tanto, en concepto de esta Corte, no se cumple con las exigencias que le impone al empleador el artículo 161 del Código del Trabajo para invocar la causal de despido, sin que exista una infracción por falta de aplicación de dicho precepto y en ese sentido debe rechazarse el recurso de nulidad respecto de la acción por despido y la petición de dejar sin efecto condena al recargo del 30% por sobre las indemnizaciones.

Décimo séptimo: Que en cuanto a la devolución del aporte del



empleador al subsidio de cesantía, a pesar de que la demandada lo enuncia en este tramo, no lo desarrolla sino en el siguiente, por lo que con cierta indulgencia habrá que estarse a lo que se precisa a continuación.

iv) Segunda causal del artículo 477 del Código del Trabajo:

Décimo octavo: Que se critica aquí por la parte demandada, que la sentencia haya dado lugar a la devolución del aporte del empleador al seguro de cesantía, entendiendo que puede deducirlo al haber sido invocado como motivo para el despido las necesidades de la empresa, infringiendo al no aceptarlo el correcto alcance de los artículos 13 y 52 de la ley 19.728.-

Décimo noveno: Que el citado artículo 13 de la Ley N° 19.728, establece que: *“Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios...”*, agregando el inciso segundo que *“se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía...”*.

Por su parte, el artículo 52 de la citada ley establece que: *“Cuando el trabajador accionare por despido injustificado, indebido o improcedente, en conformidad al artículo 168 del Código del Trabajo, o por despido indirecto, conforme al artículo 171 del mismo Código, podrá disponer del saldo acumulado en su Cuenta Individual por Cesantía, en la forma señalada en el artículo 15, a partir del mes siguiente al de la terminación de los servicios”*.

Vigésimo: Que, del tenor de las disposiciones antes transcritas, se desprende que, para que el descuento opere, es necesario que el saldo que se registra en la cuenta individual del trabajador, por concepto de seguro de cesantía, se haya producido el término de los servicios del trabajador por la causal de necesidades de la empresa.

Por ende, si el trabajador ha recurrido a la justicia para que se pronuncie sobre la validez de esa causal de término de los servicios, en relación con el recargo legal del 30% de la indemnización por años de servicios y de la restitución de esos fondos descontados en el finiquito,



los efectos que se derivan de aquella pretensión quedan en suspenso hasta la decisión jurisdiccional.

Ahora bien, si el juez determina que no se han probado debidamente las necesidades de la empresa para despedir al trabajador y declara que el despido de éste es injustificado -como ocurre en la especie- no puede tener lugar la imputación referida en el inciso segundo del artículo 13 precitado, ya que esa deducción está sujeta a la condición de haber operado efectivamente la causal de necesidades de la empresa.

Vigésimo primero: Que este predicamento se refuerza en el inciso segundo del artículo 52 de la Ley N° 19.728, antes aludido, toda vez que al acogerse la demanda del trabajador, declarando el despido improcedente, dicha disposición establece que el tribunal *“deberá ordenar que el empleador pague las prestaciones que corresponden conforme al artículo 13”*, referencia que debe entenderse hecha al inciso primero de este último precepto, pues el pretendido descuento obviamente no es el pago de las prestaciones, sino una disminución de las mismas.

Vigésimo segundo: Que también es útil traer a colación lo establecido en el artículo 54 del mismo cuerpo legal establece que: *“Las prestaciones establecidas en esta ley de cargo de los empleadores a favor de los trabajadores afiliados al Seguro, tendrán la calidad jurídica de indemnizaciones por años de servicio, para todos los efectos legales, y gozarán del privilegio establecido en el N° 8° del artículo 2472 del Código Civil”*.

Y finalmente, el artículo 168 del Código del Trabajo, establece en su inciso penúltimo, que: *“Si el juez estableciere que la aplicación de una o más de las causales de terminación del contrato establecidas en los artículos 159 y 160 no ha sido acreditada, de conformidad a lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el término del contrato se ha producido por alguna de las causales señaladas en el artículo 161, en la fecha en que se invocó la causal, y habrá derecho a los incrementos legales que corresponda en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores”*.



Vigésimo tercero: Que en suma, por lo ya expuesto, la interpretación que ha dado la sentencia a las normas denunciadas es la correcta, por lo que no se configura la infracción de ley esgrimida por la demandada, lo que conlleva al rechazo del recurso.

v) Tercera causal del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo:

Vigésimo cuarto: Que argumenta el recurrente que no se ha dado cumplimiento en el fallo a lo dispuesto en el artículo 459 N°4 del Código del Trabajo, ya que se ha efectuado una fundamentación parcial o incompleta, dejando de analizar uno o más medios de prueba en relación con la procedencia de descuentos ventilados por la vía de la compensación. En particular el vicio se produce al indicar el fallo que su parte se valió únicamente del finiquito que consignaba tales deducciones, a pesar de que se aportaron otros datos. A saber:

1. Por doña Patricia Mejías Cuevas:

- a) Documento N°7 da cuenta de un mutuo suscrito el 22 de noviembre de 2014 entre las partes, por concepto de crédito hipotecario ascendente a UF 1.500, cuyo pago será descontado de sus remuneraciones y en caso de existir deuda, de sus indemnizaciones.
- b) Documento N°6: liquidaciones de remuneraciones que consigna los descuentos mes a mes por préstamos habitacionales.
- c) Documento N°8: solicitud de préstamo por UF 242,6921 pagadero en 16 cuotas con descuento hasta el mes de agosto de 2020.

Con todo lo anterior debió concluirse que ella adeudaba a su empleadora saldos pendientes que ameritaban el descuento.

2. Por don Carlos Salazar Basoalto:

- a) Documento N°6: solicitud de préstamo de 20 de julio de 2018 por \$2.000.000.- pagadero en 24 cuotas con descuentos mensuales.
- b) Documento N°8: liquidaciones de remuneraciones que dan cuenta de 13 descuentos, existiendo saldo pendiente.

3. Por don Alejandro Carlos Maluenda:

- a) Documento N°5: mutuo suscrito el 22 de noviembre de 2014, con fines habitacionales por UF 1.000, crédito hipotecario que le sería descontado de las remuneraciones o de las indemnizaciones que



tuviera derecho en caso de término de la relación laboral.

b) Documento N°3: liquidaciones de remuneraciones con los descuentos mes a mes. Y existencia saldo pendiente.

Además en relación a todos los demandantes, no fue considerado el Documento N°13, que corresponde al Convenio Colectivo suscrito con el Sindicato de los actores que surge como fuente de los préstamos otorgados a aquéllos en su calidad de trabajadores de CODELCO en que aparecen préstamos corrientes, de emergencia y habitacionales.

Al señalar la sentencia erradamente que no existían antecedentes, la infracción se produce, quedando clara la influencia ya que si se hubieren tenido en cuenta la excepción de compensación (y pago) se habría acogido.

Vigésimo quinto: Que según se observa de la sentencia, sobre estos préstamos, en el Considerando 4.2 da cuenta los documentos que se denuncia como omitidos y también se refiere vagamente a este aspecto la prueba testimonial de la dos partes, en los Motivos 6.1 y 6.2., pero lo cierto es que la razón de su rechazo está en el Fundamento 20 por falta de concreción de la petición de la demandada, lo cual no fue rebatido en el recurso por ésta, en quien recaía el deber de detallarlo con claridad, y que eventualmente podría corresponder a otro motivo de nulidad, pero no omisión de prueba.

En efecto a este respecto dice el sentenciador: *“Puede inferirse a ciegas, que tales acreencias deben provenir de los instrumentos colectivos, desde que se lee –a modo de ejemplo, en el instrumento colectivo vigente- la existencia de tales beneficios, reconducidos regularmente a reglamentaciones. Con todo, tal inferencia no soslaya la deficiencia de su postulación –que impide acceder a las excepciones solicitadas, por manifiesta falta de fundamento en la base de postulación y en contravención expresa del mandato del inciso segundo del artículo 452 del Código del Trabajo”.*

Por ende tampoco podría acogerse este capítulo.

Vigésimo sexto: Que a mayor abundamiento no existe claridad si los diferentes motivos de nulidad se interpusieron conjunta o subsidiariamente como mandata el legislador, dejando al arbitrio de



estos resolutores decidir, cuestión que pugna con la seriedad que debe imprimirse a la solicitud.

En definitiva, por estas razones y visto además lo dispuesto en los artículos 474, 477, 478 letra e), 479, 480 y 481 del Código del Trabajo, **se rechazan** los recursos de nulidad opuestos por la parte demandante y por la parte demandada, contra la sentencia pronunciada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en el RIT T-1684-2019, con fecha cuatro de enero de dos mil veintidós,

Redactó la ministra (S) señora Poza.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, comuníquese al tribunal de origen.

N° Laboral - Cobranza-275-2022.

Pronunciada por la **Duodécima** Sala, presidida por la Ministro señora Elsa Barrientos Guerrero, quien no firma por ausencia no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa e integrada además, por la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus y la Fiscal Judicial señora Clara Carrasco Andonie.



Pronunciado por la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Suplente Lidia Poza M. y Fiscal Judicial Clara Isabel Carrasco A. Santiago, trece de octubre de dos mil veintidós.

En Santiago, a trece de octubre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

